

## **EL MAÍZ TRANSNACIONAL CONTRA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

**GUSTAVO CASTRO SOTO**  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 5 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Cuando el gobierno federal, allá por 1996, anunciaba la privatización de la empresa estatal Conasupo, la importación de maíz cada vez mayor de los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la eliminación de los controles al precio de la tortilla, la reducción de los subsidios y asesorías técnicas; también les dijo a los campesinos que ya no sembraran maíz, que se dedicaran a sembrar otros productos y que la Conasupo compraría el grano a los Estados Unidos. Fue entonces cuando los maiceros de la Zona Centro y Frailesca de Chiapas, el granero de la entidad, bloquearon las carreteras y pusieron en aprietos a la economía chiapaneca por muchos días. Durante este conflicto, la empresa privatizada de Maseca ubicada en la región, en el municipio de Ocozocoautla, compró alrededor de 90 mil toneladas de maíz a los Estados Unidos según la Unión de Productores de Maíz (UPROMAIZ, A.C.) ubicada en el municipio de Villaflores.

La presión de los campesinos fue tal que el gobierno y la empresa Maseca, ahora privatizada como Molinos Azteca de Chiapas S.A. de C.V. del Grupo Industrial Maseca S.A. de C.V. (GIMSA), aceptaron seguir comprando el maíz a los productores. Pero les tendieron una trampa. Las mismas empresas transnacionales que venden el maíz a Maseca comenzaron a venderla a los mismos productores con semillas patentadas y grandes paquetes de agroquímicos, ofreciendo más toneladas por hectárea, argumentando que el maíz criollo no produce mucho y amenazándolos con no comprarles por la presencia de hongos en el producto. Sin embargo, según esta organización, en el presente año, Maseca les compró 57 mil toneladas de maíz y 187 mil toneladas de maíz forrajero a los Estados Unidos.

Los productores del campo, ante la crisis y la negativa de acceder a más tierras, comenzaron a festejar el espejismo de la dicha. A partir de 1999, las empresas transnacionales y el gobierno hicieron eco de estos argumentos. Mientras las empresas prometieron rendimientos altos, el gobierno prometió subsidios para adquirir el "paquete tecnológico" de las empresas. Actualmente, UPROMAIZ ofrece a los productores la compra de cinco tipos de semillas patentadas de las empresas Pioneer, Asgrow, Cargill, Cristiani Burcal y Novasem. Con ellas producen ahora entre 8 y 10 toneladas de maíz por hectárea, como en los Estados Unidos, pero pagando precios de producción más bajos. En este año se les pagó a los productores mil 510 pesos la tonelada cuando en 1998 les daban mil 350 pesos. Ello equivale tan sólo a 160 pesos más de diferencia, mismos que se van en la compra de fertilizantes cuyos precios han aumentado. Actualmente, la tonelada de fertilizantes les cuesta mil 850 pesos para hectárea y media, máximo dos.

Así, el productor elige la semilla privada que más le guste, acude a UPROMAIZ quien le otorga un formulario de dicha empresa y luego va al banco a depositarle a su cuenta 220 pesos. Posteriormente se dirige a las oficinas de la transnacional ubicadas en el municipio de Villaflores para que le hagan entrega de su "paquete tecnológico" que consiste en la semilla de maíz, fertilizantes, agroquímicos, fertilizantes foliares y enraizadores. Posteriormente, dicha empresa acude al gobierno para cobrar 320 pesos que es el resto del costo del "paquete tecnológico" entregado al campesino, ya que su costo va desde los 550 a los 684 pesos según la marca. Esto lo paga el programa gubernamental de Alianza para el Campo financiado por medio de deuda externa con la banca multilateral como es el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si el productor elige el "paquete tecnológico" más caro, usa los recursos del Procampo, que no todos tienen (829 pesos por hectárea), para acceder al crédito o como garantía para la maquinaria que también puede rentar, o de plano usa las escrituras de su rancho como garantía.

UPROMAIZ tiene presencia en al menos 14 municipios, entre ellos Villaflores, Ángel Albino Corzo, Villa de Acala, Chiapilla, Jitotol, Comitán, Villa Corzo, La Concordia, Venustiano Carranza, Socoltenango, Totolapa, Ocozocoautla, San Lucas y Chicomuselo. Hace poco tiempo contaba con alrededor de 20 mil productores en Chiapas, mismos que han aumentado ya que otros municipios de Los Altos empiezan a incorporarse a esta dinámica. En esta región como en la Zona Norte y Selva vemos ya la propaganda de estas empresas: Monsanto y Novartis, entre otras.

Las diez empresas transnacionales más grandes en el mundo en la producción de semillas controlan el 30% del mercado comercial mundial de semillas valuado en 24,4 millones de dólares en el año 2000. El primer lugar lo tiene DuPont (Pionner) y le siguen Monsanto, Novartis (Syngenta), Groupe Limagrain, Pulsar, Advanta y Netherlands, Dow (Cargill), KWS AG, Delta and Pine Land y Aventis.

UPROMAIZ acepta que en la región ya no existe el maíz criollo. Ya nadie lo conoce ni se acuerda de él. Conocen más, por ejemplo, el maíz 30F94 y 3086 de la empresa transnacional Pionner (DuPont), o sus híbridos 3086 y 30F94. Así, la soberanía alimentaria se va perdiendo rápidamente sin que el gobierno del estado se percate de ello o quiera hacerlo. En muchas regiones, anteriormente, el indígena y el campesino sembraban su maíz, lo cosechaban y parte de él se lo comían, otra lo vendían y otra parte la guardaban para la siguiente cosecha. Ahora compran la semilla a una empresa, le producen muchas toneladas a bajo costo, le consumen millones de dólares en agroquímicos, y luego se la venden barata y posteriormente le compran la tortilla industrializada.

La región Centro y Frailesca de Chiapas es la imagen del imperio transnacional. Por todos los caminos y tiendas se anuncian todas las marcas de semillas y agrotóxicos para el maíz de las principales empresas transnacionales como Decistab de Aventis; Rival, Faena, Faena Fu, Glyphos, Herbipol Glifosato, Harness y Rangel, de Monsanto; Quron de Dow AgroSciences; Gesaprim de Novartis; Forza, Brigadier, Coloso,

Nuvacron, Semevin, Esteron \*47M, Tacsá Quat, Herbipol Amina, Herbipol Para Quat, Karate, Chapoleo-E 400 CE, Chapoleo-A 480 SC, Secaszone 25 SC, Gramocil, Finale SL 14, entre otros.

El año pasado, Novartis controló el 20% del mercado mundial de ventas en agroquímicos. Esta empresa transnacional vendió un total de \$6,100 millones de dólares colocándose en primer lugar. Monsanto tuvo el 2o lugar con el 14% de las ventas mundiales; Aventis el 3er lugar con el 11% de las ventas; BASF en el 4o. lugar con el 11% de las ventas; Pionner (DuPont) obtuvo el 5o. lugar con el 8% de las ventas; Bayer el 6o. lugar con el 7% de las ventas; Dow el 7o. lugar con el 7% de las ventas de agroquímicos. En otras palabras, las 10 empresas agroquímicas más grandes del mundo controlan el 85% de las ventas.

El gobierno continúa sirviendo de distribuidor de estos agroquímicos por las comunidades indígenas y campesinas como la Faena, Rangel o Rival de Monsanto cuya base es el Glifosato, sustancia activa del herbicida, agente bioquímico y el tercer plaguicida que ha provocado más problemas de salud entre los trabajadores rurales de California. El Glifosato impide la fijación del Nitrógeno en las plantas, elimina los hongos que ayudan a las plantas a absorber el agua y los nutrientes. Monsanto, con su "agente naranja" roció millones de hectáreas de bosques en Vietnam y ahora lo hace con el Glifosato en Sudamérica bajo el "Plan Colombia" desplazándose el agroquímico hasta en un 80% del sitio donde se rocía desde las aeronaves; que destruye la biodiversidad y que se fija en la tierra por largos periodos. Esto ha llevado a un debate entre el gobierno de Colombia y sus legisladores quienes exigen prohibir el rocío de glifosato por los daños a la salud de los campesinos e indígenas. "Lo que ha faltado es que se diga que (el glifosato) se puede comer con Corn Flakes", manifestó el senador Rafael Orduz quien además señaló que "las fumigaciones son un fracaso porque durante diez años que se han hecho en Colombia los cultivos ilícitos pasaron de 40 mil a 160 mil hectáreas y anunció que presentará un proyecto de ley para suspenderlas definitivamente como ya lo hicieron Bolivia y Perú".

Según la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI), son sólo cinco las empresas transnacionales más poderosas, los llamados gigantes genéticos, que dominan el sector agrobiotecnológico, entre ellos Monsanto (Pharmacia), DuPont, Syngenta (Novartis y Astra Zeneca), Aventis y Dow. Recientemente también Bayer y BASF. Cuatro cultivos industriales de exportación (soya, maíz, algodón y colza) representaron el 100% del área de cultivo comercial que se plantó en el año 2000, principalmente en Estados Unidos, Argentina y Canadá, donde estuvo el 98% del área plantada con transgénicos; pero solo una empresa de semillas transgénicas es responsable del 94% del área cultivada con transgénicos comerciales en todo el mundo: Monsanto.

Por otro lado, no sobra recordar las denuncias que ha hecho la organización Greenpeace sobre las importaciones a México, provenientes de los Estados Unidos, de maíz transgénico mezclado en la harina de maíz que industrializa Maseca y que también

se utiliza para la elaboración del jarabe de alta fructuosa que sustituye al azúcar de caña y que, entre otros factores, tiene en crisis a los productores de caña del país (Chiapas cuenta con dos ingenios azucareros: Pujilic y Huixtla).

Erika Pinzón Navarro, investigadora de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas, confirma que Chiapas es uno de los estados con mayor padecimiento de cáncer provocado por el uso de agroquímicos de alto riesgo, los que se encuentran prohibidos en otros países. En una reunión llevada a cabo en el pasado mes de agosto sobre la evaluación ambiental y la salud, el secretario de Salud de Chiapas, Ángel René Estrada señaló la necesidad de disminuir los riesgos que impactan a la salud. Lo que no sabe es que el mismo gobierno para el que trabaja es quien distribuye por medio de los programas gubernamentales los mismos riesgos, los mismos agroquímicos.

En la región del Soconusco el uso de plaguicidas como el Malatión están causando ya graves daños a la salud. En el municipio de Mazatán once menores fueron afectados por consumir agua contaminada con plaguicidas. En la reunión mencionada, se informó que el 96% de agricultores que aplican plaguicidas de alta peligrosidad, el 95% lo hacen sin utilizar equipos de protección personal, además del tráfico de plaguicidas procedentes de Guatemala y la deficiente aplicación de normas, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). (Cuarto Poder, 6 de agosto de 2001).

En el mes de julio se anunció que la sequía en América Central amenaza con desatar una catástrofe humanitaria peor que la que provocó el huracán Mitch hace cinco años. El hambre se asoma en las zonas cafetaleras de Nicaragua y durante los meses de julio y agosto murieron de hambre niños y adultos en las comunidades de Las Calabaceras, La Quemazón y El Aguacate. Los nicaragüenses empiezan a migrar también a Costa Rica en busca de empleos pero se encuentran con más controles migratorios que impiden su entrada a este país. (El Diario de Hoy, 21 y 22 de julio).

Honduras se declara en Estado de Emergencia por el hambre de 150 mil campesinos que dependen de cultivos de subsistencia y en la mitad de los departamentos del país. Alrededor de 1.5 millones de quintales de maíz, frijol y maíz cultivados en unas 65 mil hectáreas se perdieron. El Programa Mundial de Alimentos envió en julio los primeros 450 quintales de maíz y 300 de frijoles para las familias de algunas regiones, como parte del cargamento de 227 toneladas de alimentos con los que pretende apoyar a la población.

En Guatemala el gobierno reportó que la falta de lluvias han causado pérdidas de casi 20 millones de dólares en cosechas y no reparó en aumentar los impuestos como parte de la Reforma Fiscal que le imponen el Fondo Monetario Internacional, lo que ha llevado a una ola de protestas y sistemáticas represiones.

En El Salvador se perdieron 2.4 millones de quintales de maíz por la sequía. En algunas regiones se perdieron las cosechas entre un 75 y 100%. Ante ello se lanza el Plan Sembrador donde, nuevamente las empresas transnacionales fortalecen su mercado y la dependencia de los países pobres. El gobierno de El Salvador empezó a distribuir entre agosto y julio 5 mil 200 quintales de semillas de maíz patentado e híbrido (variedad HQ61) y 500 quintales de semillas de frijol (variedad Centa 2000) a los campesinos, pero garantizando que éstos puedan consumir los agroquímicos que requiere la semilla. Más adelante, el programa se llevará por medio de créditos, la semilla ya no será regalada y el circuito de la dependencia se habrá llevado a cabo.

La africanización y la hambruna se acerca a Centro América y Chiapas. La migración aumenta y en este contexto el gobierno de México anuncia la creación del Plan Sur para fortalecer el sellamiento de la frontera con más militares y cuerpos policíacos para contener la pobreza del sur. Recientemente el presidente Vicente Fox inauguró en la frontera de Chiapas una oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para contrarrestar el aumento de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que sigue en aumento.

En el pasado mes de agosto el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde laboran personal de la empresa Monsanto, anunció la inminente comercialización de la tecnología "Terminator" para el 2003 otorgando la licencia a su socio privado Delta Pine Land (DPL), uno de los gigantes mundiales en producción de semillas. Esta tecnología producirá semillas estériles o suicidas de soya, arroz, trigo, maíz, etc., lo que impedirá a los campesinos guardarlos para usarlos en la siguiente ciclo de cultivo. Según RAFI, en México se varían afectados 3 millones de productores de granos básicos y cerca de 400 millones de personas en el mundo, básicamente campesinos pobres, que dependen de guardar las semillas para las siguientes cosechas. Aunque otras empresas transnacionales líderes en biotecnología como Monsanto, Aventis, Novartis y DuPont, con presencia en Chiapas, tienen patentes sobre la tecnología Terminator, sólo DPL ha informado abiertamente su intención de comercializar estas semillas.

Con la tecnología Terminator se pondría en riesgo 30 razas de Maíz en México y cientos de variedades. El campesino y el indígena perderían el total control sobre su alimentación, su soberanía y autonomía. Por ellos urge un gobernador valiente que sea capaz de decretar a este estado libre de patentes y transgénicos antes de que los campesinos, como en Brasil, se vean obligados a quemar las fábricas y las miles de hectáreas que producen alimentos transgénicos que, en este caso, Pulsar, ubicado en el estado de Chiapas, es quien corre el riesgo. Pero también se requiere que las organizaciones indígenas y campesinas tomen conciencia sobre el problema y se organicen, defiendan su maíz que es identidad, alimento, autonomía y el espíritu que sople el alma de la resistencia indígena.

Por tanto, de seguir esta tendencia muchas comunidades campesinas e indígenas no se darán cuenta:

- 1) Que en pocos años esa tierra será inservible para sembrar cualquier otro producto por tanto agrotóxico que impactará no solo sus tierras, sino la biodiversidad y los mantos acuíferos envenenados.
- 2) Que le han desaparecido el maíz criollo de su región y de sus manos, por lo que ya perdió las posibilidades de autosuficiencia, de controlar su semilla milenaria, de elaborar sus propios alimentos cuando la empresa decida retirarse del lugar. De ser dignamente autónomo produciendo su comida.
- 3) Que las empresas transnacionales salen ganando más dinero, que venden sus semillas privadas de maíz, controlan los precios y se controlan el mercado; y venden más agrotóxicos que sólo su maíz requiere.
- 4) Que entrega a las empresas más toneladas de maíz a precios relativamente más bajos.
- 5) Que el gobierno federal y estatal hacen eco de esta política, subsidian a las empresas transnacionales con deuda externa y pretenden que el campesino y el indígena vivan la miseria bajo el espejismo de la riqueza.
- 6) Que el subsidio no es para el productor, sino para las empresas transnacionales. Los 220 pesos se los cobrarán más caro cuando el gobierno federal tenga que devolver los préstamos que solicitó a cambio de aumentar los impuestos a la población para poder pagar, abrir más las fronteras al supuesto "libre comercio" que beneficia a las grandes empresas y venderles más empresas estatales.
- 7) Que en pocos años los productores solo tendrían dos opciones: emigrar a las ciudades o a Estados Unidos; o cambiar a los cultivos de agro exportación que caprichosamente impongan las empresas transnacionales aumentando la pobreza, la dependencia alimentaria y las ganancias a las empresas. Esto ya está sucediendo en las regiones fronterizas de Chiapas, sobre todo en los distritos de riego del municipio Frontera Comalapa y Chicomuselo quienes ya han sembrado melón, sandía o la flor de cempasúchil que les proponen las empresas provocando mayor migración, pérdida del maíz y el endeudamiento que se pretende pagar cobrándoles a los campesinos por adelantado los recursos del Procampo de los siguientes años. Todavía peor es la pretensión de pagar los créditos con la entrega de sus tierras, por lo cual se les exige como garantía para el crédito su certificado de propiedad impulsado por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede). En esto, las mujeres campesinas e indígenas llevan las peores consecuencias ya que las propiedades quedan en manos de los hombres.
- 8) Que si esta invasión de maíz patentado entra a la región de los Altos, Norte y Selva, donde el campesino indígena, por condiciones de la tierra, produce menos toneladas por hectárea, provocará más hambre y miseria en el campo chiapaneco.

El gobierno mexicano sigue declarando la guerra al campo mexicano y a sus productores; y con los indígenas se agrava al no dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés con la aprobación de la Ley Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígenas. Es urgente una política gubernamental para el campo que beneficie a los pobres, al campesino y al indígena, que garantice la autosuficiencia alimentaria sin entregar nuestra soberanía a las empresas transnacionales estadounidenses. Los indígenas han tenido el maíz en sus manos por milenios, lo han cuidado, lo han diversificado. Aquí nació y desde aquí se entregaron a la humanidad cientos de especies maíz. Ahora esta biodiversidad se está perdiendo y se está patentando; privatizando por piratas que han pirateado la semilla, la han arrebatado de las manos indígenas y se las han regresado con marcas, prohibiciones, controles y más agrotóxicos. La resistencia indígena no sólo es política, sino alimentaria. Quien controla la comida, la semilla, controla la vida y la resistencia del pueblo. Mantener el maíz criollo es defender la identidad, el alimento, la cultura, el futuro y el de todos. La resistencia del maíz criollo es la resistencia y responsabilidad de todas y todos.